



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ÓRGANO OFICIAL

EDICIÓN MENSUAL / AÑO 3 / N° 32 / NOVIEMBRE 2011



CON MASIVA ASISTENCIA TC CELEBRÓ EL VIGÉSIMO NOVENO ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ

Con la asistencia de autoridades políticas, congresistas, juristas e invitados especiales, el Tribunal Constitucional celebró el Vigésimo Noveno Aniversario de creación de la Jurisdicción Constitucional en el Perú, en cuyo marco se otorgó la medalla de honor "José Faustino Sánchez Carrión" al embajador Hugo de Zela Hurtado y a los doctores Felipe Osterling Parodi y Róger Cáceres Velásquez.

El vicepresidente de TC, Ernesto Álvarez Miranda, tuvo a su cargo las palabras alusivas al acto, destacando la trayectoria de los personajes por su defensa de la democracia, de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en el Perú

desde sus distintas posiciones políticas y labor que realizaron.

El doctor Felipe Osterling Parodi, al hacer uso de la palabra a nombre de los tres distinguidos, hizo un recuento de la trayectoria profesional de cada uno de ellos, dejando para el final lo que llamó "algunas pinceladas" de su vida. Del embajador Hugo de Zela dijo que se trata de un maestro universitario y de un extraordinario embajador cuya experiencia es utilizada en la actualidad por la Comisión que defiende la demanda marítima de Perú ante la Haya. Respecto de Róger Cáceres destacó sus 38 años de experiencia en el Congreso de la República.

Por su parte, recordó su ingreso a la política y su desempeño en la función pública en el Congreso de la República, como senador y sus anécdotas cuando le tocó ser ministro de Justicia en el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, cuando hizo posible la devolución de los medios de comunicación a sus dueños y finalmente concluyó con el autógrafo de Alberto Fujimori en 1992 y sus consecuencias.

Cerrió la ceremonia el presidente del TC, Carlos Mesa, quien agradeció la asistencia de los invitados a la ceremonia en el que se celebró los 29 años de existencia de la jurisdicción constitucional en el Perú. Explicó que



esta distinción se hace a personalidades que son parte de la historia política y diplomática del siglo XX.

Dijo que se trata de personas que son un ejemplo a seguir porque durante su trayectoria han sobresalido no sólo en la función pública sino particularmente en la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales de la persona.

TC RESUELVE CASO MAJES-SIGUAS II MEDIANTE UNA DECISION QUE BENEFICIA A LOS CIUDADANOS DE CUSCO Y AREQUIPA

El Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros referido al proyecto Majes Sigas II (Expediente N° 01939-2011-PA/TC), ordenando la realización de un nuevo y definitivo estudio técnico de "balance hídrico integral" que será realizado en lo inmediato posible sobre iniciativa de las tres partes: Gobierno Nacional (Presidencia del Consejo de Ministros-Proinversión), Gobierno Regional de Cusco y Gobierno Regional de Arequipa, quienes definirán el plazo, condiciones y financiamiento de dicho estudio.

Asimismo, declaró nula la resolución de segunda instancia judicial de Cusco que disponía la "suspensión definitiva" del proyecto Majes Sigas

II, pues ello no fue lo decidido por la Sala Mixta de Sicuani-Canchis, Cusco.

El referido estudio deberá ser realizado y concluido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos en el Perú, y en su desarrollo podrá escuchar la sustentada opinión y el parecer profesional y académico de los especialistas y técnicos de dichos gobiernos regionales (de Cusco y Arequipa), el mismo que, será concluyente e inobjetable, debiéndose remitir al Tribunal Constitucional a efectos de disponer el archivo definitivo del presente proceso constitucional.

El Tribunal destaca que si bien la posición u opinión de cada ciudadano de Cusco y Arequipa, así como la

de determinadas organizaciones que los representan (Comités de Lucha, Frentes de Defensa, etc.) o incluso, aquella de las municipalidades distritales o provinciales comprometidas en este caso, tienen la mayor relevancia en la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional o de los Gobiernos Regionales de Cusco o Arequipa, son estos tres últimos "los Gobiernos", quienes tienen asignada la competencia necesaria para actuar en representación de los aludidos ciudadanos u organizaciones en lo que se refiere al asunto de autos, tal como se desprende de los artículos 192° y siguientes de la Constitución Política y del propio artículo 4° de la Ley, Órgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27876).

El Tribunal sostiene que los representantes técnicos que podrán participar en la realización del nuevo

balance hídrico por parte de la ANA, serán sólo aquellos que designen los respectivos gobiernos regionales de Cusco y Arequipa, así como el gobierno nacional, por lo que será cada región la que internamente identifique a los representantes técnicos más idóneos que deban participar en el desarrollo del estudio de balance hídrico

disputo. El Tribunal Constitucional exhortó además a todas las partes intervinientes en el proceso de amparo de autos, autoridades y a todos aquellos ciudadanos interesados en el presente caso, a coadyuvar con los respectivos gobiernos nacional y regional en la materialización de lo decidido y evitar la generación de cualquier tipo de conflicto.

ÍNDICE			
Editorial: El Proyecto Majes-Siguas II PÁGINA 2	Jurisprudencia Constitucional: Precisan obligación de la DIF de reconocer aportes para efectos pensionarios realizados antes de 1982 PÁGINA 3	Jurisprudencia Constitucional: Rechazan habeas corpus de ex congresista Róger Medelino que solicitaba nulidad de la sentencia PÁGINA 4	
CEC: Vicepresidente del TC Ernesto Álvarez presentó la Revista Puntos de Derecho Constitucional PÁGINA 6	Programa Tuz Derechos: Se debe reglamentar la Ley General de la Persona con Discapacidad para hacer efectivo el artículo que ordena cumplir a personas con discapacidad PÁGINA 7	Noticias Institucionales: En el mes de noviembre el TC realizó en Lima audiencias públicas de Pleno y Salas dejando al voto 643 procesos PÁGINA 8	



Columna del Director

Carlos Mesia



El Proyecto Majes-Siguas II

No han sido pocas las oportunidades en las que el Tribunal Constitucional (TC) ha tenido que pronunciarse en aquellos procesos constitucionales en los que de por medio se encontraba una probable afectación del derecho a un medio ambiente y que además, venían aparejados de un fuerte conflicto social. El caso relacionado con el Proyecto Majes-Siguas II no ha sido la excepción sino que, por el contrario, ha confirmado esta tendencia.

La resolución final recaída en el expediente N° 01939-2011-PAT/TC apuntó, por sobre todo, a encontrar una solución equitativa que benefició tanto a los ciudadanos del Cusco como a los de Arequipa y lo más importante es que el TC declara que el proyecto es viable.

Se requería de una respuesta inmediata de la jurisdicción constitucional a efectos de evitar mayores consecuencias e indeseados conflictos sociales, razón por la que el Tribunal Constitucional, adecuando las bases exigidas al cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales, decidió emitir un pronunciamiento en sede de instancia final a efectos de definir las situaciones jurídicas comprometidas en la referida etapa de ejecución de sentencia.

El Tribunal verificó que los magistrados integrantes de la Sala Única de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco vulneraron la garantía constitucional de la cosa juzgada al desvirtuar la sentencia contenida en la resolución N° 85, además de renunciar a su obligación de solucionar la controversia y resolver el conflicto que continuaba pendiente.

Por tal razón, se declaró fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Procurador público de la presidencia del Consejo de Ministros encargado de la defensa de Proinvestir, y en consecuencia, nula la resolución N° 197 que había dispuesto la suspensión indefinida del Proyecto Majes-Siguas II.

A fin de hallar una solución equitativa, se ordenó la realización de un nuevo y definitivo estudio técnico de "balance hídrico integral" a iniciativa del gobierno nacional y los gobiernos regionales de Cusco y Arequipa, quienes definirán el plazo, condiciones y financiamiento de dicho estudio.

Por los demás, el TC ordenó, y lo reitera ahora, que tanto las partes como cualquier ciudadano coadyuven en la materialización de lo antes establecido y, principalmente, en evitar la generación de cualquier tipo de conflicto. Esa es, en última instancia, la verdadera razón de ser de lo decidido por este Tribunal.

El fallo del Tribunal Constitucional sobre Majes Siguas II es netamente jurídico

El fallo del Tribunal Constitucional sobre Majes Siguas II es netamente jurídico y para ello se sometió a una evaluación minuciosa por todos los miembros del Pleno, señaló el doctor Oscar Uribe Hani, magistrado del Tribunal Constitucional.

"Nuestra decisión por unanimidad está amparada en la Constitución Política del Perú. La resolución de la Sala de Vacaciones no debió pronunciarse sobre el proyecto en sí, pues al hacerlo vulneró la cosa juzgada y el debido proceso", precisó.

Recordó que la Sala de Casación-Sicuan en última instancia dijo que el proyecto era viable y pidió los estudios de impacto ambiental y el balance hídrico. Lo único que debió hacer la Sala de Vacaciones era aceptar o rechazar estos documentos, pero se pronunció sobre el tema de fondo.

El doctor Uribe explicó que precisamente sobre los estudios, luego de analizarlos se concordó que el impacto ambiental tiene plena validez, pero ante los miedos de la población de verse afectados por su acceso al recurso hídrico, se dispuso un nuevo balance hídrico integral.

"También coincidimos en la necesidad de solicitar a la Oficina de Control de la Magistratura y al Consejo Nacional de la Magistratura



que se pronuncie sobre el actuar de los integrantes de la Sala de Vacaciones que no respetaron la cosa juzgada, actuando en forma irresponsable y transgrediendo el debido proceso. Los fallos del TC son inapelables", precisó el magistrado Oscar Uribe Hani.

Dijo que muchas veces el TC tiene que enmendar la pluma a muchos jueces o vocales y eso es lamentable.

Presidente Regional de Arequipa Hay que tomar fallo del TC con calma



El presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén indicó que toma la decisión del TC con mucha tranquilidad. "Ratificamos nuestro compromiso con Cusco, de garantizar que tendrán el agua que necesitan, tanto para su actividad agrícola como para el consumo humano", aseguró a la autoridad.

Además, que Arequipa no tendrá ningún inconveniente en hacer los ajustes necesarios e incluso elevar el caudal ecológico establecido por hora en 2.4 metros cúbicos por segundo.

Reveló que buscó contacto con el presidente del Gobierno Regional de Cusco, Jorge Acuña, e incluso con el mandatario Ollanta Humala, para

que en conjunto se dé un compromiso de respetar el fallo del TC. Esto como consecuencia del interés que demostró Humala en buscar una salida política al entramamiento del proyecto Majes Siguas II.

Por su parte, el congresista Juan Carlos Figueroa hizo una invocación a retomar el ritmo y encargarse a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) cuanto antes la ejecución del nuevo balance hídrico que dará precisiones de los requerimientos de agua que tiene Espinar.

Incluso aseguró que el TC dilató su pronunciamiento, porque el presidente Humala buscó una salida política que nunca llegó. "Jamás llegó por la indefinición e indecisión de Humala, producto de su falta de liderazgo", subrayó el parlamentario de Arequipa.

Fallo del TC hay que acatarlo y respetarlo, señaló presidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco

Fallo del TC con relación al tema del proyecto Majes Siguas II no favorece a ninguna región, por tanto las decisiones que se emiten desde las instancias superiores deben respetarse y acatarse, señaló el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Luis Alfonso Sarmiento Núñez.

"El fallo dictado por el Tribunal Constitucional al proceso de Majes Siguas II simplemente hay que acatarlo y respetarlo, esta decisión es inapelable en virtud de que nuestro sistema a nivel de las instancias superiores en procesos constitucionales es en última instancia, ya no hay donde recurrir como indica de manera textual la resolución", enfatizó.

En cuanto a la determinación de los miembros del TC en investigar a los magistrados de la Sala Vacacional Permanente del Cusco, el letrado indicó que es una opinión en este aspecto, porque el proceso disciplinario no lo aperturan ellos, sino que remiten una resolución al Órgano de Control del Poder Judicial y serán quienes analicen lo actuado y aperturen investigación que es un caso posterior.

El doctor Luis Sarmiento dijo que la resolución del caso Majes Siguas II indica de manera categórica que no se puede apelar a los fueros internacionales, porque no se afectan derechos fundamentales de la persona. En este caso se hablan de personas jurídicas pues son colectivos.

"El fallo del Tribunal Constitucional es una resolución muy similar a la que emitió el juez de Espinar en su momento donde indicó que el proyecto no

podía continuar en tanto no se regularan de manera adecuada los estudios de impacto ambiental y los recursos hídricos", precisó.

También fue claro en señalar que el TC con el fallo no favorece a ninguna región como es Cusco y Arequipa. Ello explica en un acápite los magistrados del Tribunal, donde hacen un balance y llegar a la conclusión que no favorecen a ninguna de las regiones, puesto lo que indica es hacer los estudios respectivos.

Sarmiento recomendó a los gobernantes de la región Cusco para que busquen profesionales capaces para que representen a la región a fin de que realicen los estudios y defiendan los intereses de la región. Además invoca a la población consciente a guardar la calma y no provocarse un caso organizando movimientos sociales por este caso hasta agotar los medios legales.

Finalmente, indicó que tras este fallo, el siguiente paso es conformar una comisión integrada por el Gobierno Central, Gobierno Regional del Cusco y Arequipa a fin de que convoquen a los profesionales más capaces para que realicen los estudios y si no se ponen de acuerdo recurrirán a estudios internacionales.



Síguenos en Facebook y en Twitter
El Tribunal Constitucional ingresa al mundo de las redes sociales, por ello invitamos a la comunidad jurídica y público en general, a unirse a nuestra Red Social en FACEBOOK y TWITTER.

Búscanos en FACEBOOK como Tribunal Constitucional y en el TWITTER como @TC-PERU. También puedes agregarnos ingresando a la página web del tribunal www.tc.gob.pe y hacer clic en el enlace.

Jurisprudencia constitucional

Precisan obligación de la ONP de reconocer aportes para efectos pensionarios realizados por los trabajadores empleados antes de 1962



Las aportaciones con fines pensionarios efectuadas por los trabajadores empleados antes del 1 de octubre de 1962 deben ser reconocidas por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), sin que pueda argumentarse que los aportes realizados por dichos trabajadores con anterioridad a la fecha indicada no tienen validez para efectos pensionarios, precisó el Tribunal Constitucional.

Así lo señaló al declarar fundada la demanda de amparo contenida en el Expediente N° 06120-2009-PA/TC formulada por Manuel Jesús Tapia Yauzo contra la ONP y en consecuencia

mulas las resoluciones emitidas por esta entidad que le negaba el acceso a la pensión de jubilación bajo el argumento que sólo se acreditarían las aportaciones efectuadas a partir del 1 de octubre de 1962 y se ordenó a la ONP el otorgamiento de una pensión de jubilación del régimen especial al demandante con el pago de pensiones devengadas, intereses legales y costos del proceso.

En el presente caso, el Colegiado evaluó la mencionada posición de la ONP y efectuó la revisión de diversos puntos, como el criterio sentado en materia de reconocimiento de aportaciones y su importancia en el acceso a las

pensiones, que inclusive ha conllevado a la expedición de la Ley N° 28407.

El TC precisa que se trata de una demanda manifiestamente fundada, por cuanto la ONP no ha reconocido los aportes bajo el argumento que ha perdido validez lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 114-74-TR, que según la Tabla Referencial del Inicio de Aportes por Zonas, establecidas por el antiguo Instituto Peruano de Seguridad Social, en esa zona aún no se empezaba a cotizar.

Para el efecto se ha analizado el principio de solidaridad y sus efectos en los aportes en el nacimiento de los seguros sociales, con el objeto de lograr la efectividad del derecho fundamental a la seguridad social y a la pensión. En ese sentido, se precisa que la posibilidad de desconocer los aportes efectuados bajo el argumento del destino que tuvieron las aportaciones o la finalidad que persiguieron, no reconocen en absoluto los alcances del principio de solidaridad al no advertir que el Sistema Nacional de Pensiones, en la actualidad, y en su momento el Seguro Social del Empleado, la Junta Nacional del Seguro Social Obrero y el Fondo Especial de Empleados Particulares, respondieron a un sistema contributivo que tuvieron como fuentes generadoras los aportes efectuados por los trabajadores, los empleadores y el propio Estado.

Ordenan a Municipalidad de Chorrillos retiro de paneles y folletos que afectan el honor y la buena reputación

El derecho al honor y buena reputación forma parte del elenco de derechos fundamentales protegidos por la Constitución y está estrechamente vinculado con la dignidad de la persona; su objeto es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante el o ante los demás, incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o información, puesto que la información que se comunique, en ningún caso, puede resultar injuriosa o despectiva.

De esta forma, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda recaída en el Expediente N° 02756-2011-PA/TC, interpuesta por Aquilino Cayetano Sanabria y el Sindicato de Trabajadores contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos, en la persona de su alcalde Augusto Myrashiro Yamashiro, a fin de que cesen los actos que a su juicio violan sus derechos, entre ellos, al honor y la buena reputación, al haberse instalado frente al local municipal carteles y folletos, distribuidos por todo el distrito, consignando los nombres de algunos trabajadores con información sobre procesos judiciales, las mismas que consideran falsas y que dañan su honor y buena reputación.

El Tribunal ordenó a los demandados el retiro inmediato de cualquier tipo de panel o cartel, así como se suspenda la distribución de todo tipo de material y/o folletos que atenten contra el honor y la buena reputación de los demandados. Al mismo tiempo, se ordenó a los demandados se abstengan de incurrir a futuro en similares prácticas que puedan afectar el honor y la buena reputación del demandante y en general, de los miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Chorrillos y de cualquier persona.

El amparo para casos de amenaza de vulneración de derechos constitucionales debe ser cierta e inminente

El Tribunal Constitucional afirmó que si bien es cierto que el proceso constitucional de amparo procede para el caso de amenazas de vulneración de derechos constitucionales, tal como lo menciona expresamente el artículo 209, inciso 2, de la Constitución, es importante resaltar que la amenaza debe poseer dos rasgos esenciales: certeza e inminencia, de modo que dicho riesgo pueda ser atendido a través del proceso constitucional de amparo.

Fue al declarar improcedente la demanda contenida en el Expediente N° 04097-2011-PA/TC, interpuesta por Froilan Zavala Roque contra la Municipalidad Distrital de Comas, solicitando que cese la amenaza de despido de la cual sería objeto, luego que fuera repuesto provisionalmente mediante una medida cautelar obtenida en un proceso en la vía laboral donde accedió luego que fuera despedido. Manifiesta que la demanda lo está amenazando con un nuevo despido.

Al respecto el TC precisó que en la Sentencia N° 0091-2004-PA/TC, específicamente en el fundamento 8, se afirmó que para ser objeto de protección frente a una amenaza a través de los procesos constitucionales, esta "debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva".

En el caso concreto, del expediente se desprende que la "amenaza" que sustentaría la pretensión del demandante no cumple con los requisitos precisados.

Rechazan demanda de Municipalidad de Miraflores por el caso de la propiedad del Mercado de Abastos N° 1 de Surquillo

El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo interpuesta por la Municipalidad de Miraflores contra los magistrados de este supremo órgano de justicia constitucional, solicitando la nulidad e ineficacia de la Sentencia N° 0003-2007-PT/TC, expedida en el marco del Proceso Competencial seguido por la Municipalidad de Surquillo en contra de la municipalidad mirafloresina.

El Colegiado reafirmó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo N° 121 del Código Procesal Constitucional, contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación o cuestionamiento alguno, por lo que resolvió declarar improcedente la demanda de amparo contenida en el Expediente N° 01203-2011-PA/TC.

La corporación demandante sostiene que la cuestionada sentencia vulnera sus derechos a la propiedad y al debido proceso legal, toda vez que el TC, pese a haber evaluado que el Mercado de Abastos N° 1 era de propiedad de la Municipalidad de Miraflores, determinó que se había producido una suerte de "mutación demarcal" por estar ubicado el mercado en la jurisdicción de Surquillo, trasladando así la titularidad a dicha Municipalidad.

La demandante refiere que esta situación le impide ejercer su derecho de propiedad, precisando además, que la demarcación territorial que determina la jurisdicción a través de las cuales, las municipalidades ejercen su competencia, no supone una transferencia de propiedad de todos los bienes ubicados en



dicho territorio, máxime cuando el Mercado de Abastos N° 1 es un bien de dominio privado, y no un bien de dominio público como erróneamente lo ha señalado el Tribunal Constitucional.

No se puede reponer a trabajador en régimen laboral distinto al ordenado por sentencia judicial con calidad de cosa juzgada

Pese a que un Juzgado Civil ordenó mediante sentencia estimativa y confirmada por la Sala Superior, que se reponga a un trabajador "en el puesto de mayor tiempo de servicios con todas sus prerrogativas y beneficios, debiendo la demandada renovar el contrato de trabajo a plazo indeterminado", la entidad no cumplió con lo ordenado, vulnerándose los derechos del demandante a la efectividad de las resoluciones judiciales y al trabajo.

Así se desprende de la sentencia recaída en el Expediente N° 00066-2010-PA/TC que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Elio Fernández Canario contra la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Las sentencias en primera y segunda instancia ordenaron a la demandada que contratara al trabajador bajo el régimen laboral del DL N° 728.

En el presente caso, se ha acreditado, contrariamente a lo dispuesto por las sentencias en sede judicial, que la demandada procedió a contratar al demandante mediante contrato a plazo indeterminado bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 276, con vencimiento al 31 de diciembre de 2008 y posteriormente se suscribió un Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con vencimiento al 31 de marzo de 2009.

De ello, se advierte que la Sociedad empleadora no cumplió con lo ordenado en la sentencia de primera instancia. Pues en vez de ejecutarla y reponer al demandante como trabajador a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728, procedió a contratar al demandante bajo el régimen laboral especial N° 1057, lo que evidentemente conlleva la nulidad de la resolución administrativa que ordenó la contratación bajo ese régimen laboral especial contraviniendo así, lo dispuesto por la sentencia expedida por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo.





Jurisprudencia constitucional

TC dispone traslado de interno para el tratamiento de su enfermedad

El Tribunal Constitucional la Oficina Regional de Lima del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumplió, el día de notificación la sentencia, con trasladar a un interno del Centro Penitenciario de Ancón Pídras Gordas a otro establecimiento penitenciario más adecuado para el tratamiento de su enfermedad.

Tras declarar fundada la demanda de hábeas corpus contenida en el Expediente N° 01362-2010-PHC/TC, ordenó además que la Oficina Regional de Lima, en el plazo máximo de 30 días naturales de notificación la sentencia, presente un informe documentado al TC en cuanto a las medidas adoptadas respecto del estado de salud en general del favorecido con el presente hábeas corpus.

El Tribunal aprecia que según el interno debe realizarse un procedimiento quirúrgico para restituir su intestino (ileostomía) el mismo que se le realice en el hospital Hipólito Unzué y que fue interrumpido a consecuencia de su traslado de penal. No obstante, el médico luego del examen, deja constancia que el interno presenta colostomía (intervención de hace 12 años), ileostomía por obstrucción intestinal (intervención quirúrgica reciente) y parálisis del que no cabe controversia.

Según el Colegiado, es posible deducir que el interno, desde que fue trasladado al establecimiento penitenciario de Ancón, ha venido recibiendo solo paliativos, tampoco se le ha prestado atención adecuada, por ello, el Tribunal considera que la administración penitenciaria debió prever y ejecutar las medidas necesarias para la recuperación de la salud del interno, máxime si, a efectos de su traslado de establecimiento penitenciario, la dirección que encargada evaluó su estado, concluyendo que proceda la aplicación del artículo 159° del Reglamento del Código de Ejecución Penal.

El principio de legalidad exige que por ley se establezcan los delitos

Como ya lo señaló en la Sentencia N° 0010-2002-AL/TC, el Colegiado reafirmó que el principio de legalidad exige que por ley se establezcan los delitos así como la delimitación precisa y clara de las conductas prohibidas. Como tal, garantiza la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal, la prohibición de la aplicación de otro derecho que no sea el estricto, la prohibición de la analogía y de cláusulas legales indeterminadas.

El TC declaró infundada la demanda de hábeas corpus contenida en el Expediente N° 01469-2011-PHC/TC, interpuesta por una ciudadana alegando que en el proceso penal que se le sigue, no tiene el acceso a apertura de instrucción como en el de enjuiciamiento se le atribuyó la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en modalidades específicas previsto en el artículo 296° del Código Penal sin que esa conducta estuviera prevista en dicho artículo cuando sucedieron los hechos.

El Tribunal consideró que el principio de legalidad penal se configura también como un derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. Como principio constitucional, informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son las conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones.

En el caso concreto, se aprecia que se amplió al auto apertor de instrucción, comprendiendo a la demandante en el proceso seguido por la comisión del presunto delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas y comercialización de insumos químicos fiscalizados.

Rechazan habeas corpus de ex congresista Oscar Medelius que solicitaba nulidad de la sentencia por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado

Infundada declaró el Tribunal Constitucional la demanda de hábeas corpus interpuesta por el ex congresista, Oscar Medelius Rodríguez, al no haberse acreditado la vulneración al derecho a la libertad individual e improcedente la demanda en cuanto a la pretendida nulidad de la sentencia condenatoria bajo argumentos de mera legalidad, propios de la jurisdicción ordinaria, en el sentido de que no se había llamado a los principales testigos, entre otras cuestiones que, evidentemente constituyen materia de connotación penal y que exceden el objeto de los procesos constitucionales.

Así lo precisó el Colegiado en la sentencia contenida en el Expediente N° 3899-2010-PHC/TC interpuesta por el referido ex parlamentario, contra los vocales de la Corte Superior de Justicia de Lima y contra los integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, denunciando la violación de sus derechos constitucionales, lo que no se pudo probar.

El objeto sustancial de la demanda es que se declare la nulidad de todo el proceso penal N° 39-2001, en el que el demandante fue condenado a 8 años de pena privativa de la libertad por delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado, sustentándose tal pretensión, señalando que en su caso no se tramitó el procedimiento de la acusación constitucional pese a que a la fecha de la investigación y denuncia fiscal ejerció el cargo de congresista, entre otras consideraciones.

El Tribunal precisa que del texto de la sentencia constitucional impuesta al demandante, se aprecia que



las resoluciones judiciales cuestionadas no resultan inconstitucionales en tanto manifiestan una motivación razonada que describe de manera suficiente los hechos criminosos imputados al demandante, su participación en aquellos y la adecuación de su conducta a los tipos penales que dieron lugar a la condena en su contra.

Reafirman que la prescripción es la institución jurídica mediante la cual por el transcurso del tiempo la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones

El Tribunal Constitucional recordó que la prescripción, desde el punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Fue al declarar infundada la demanda de hábeas corpus (Expediente N° 03711-2011-PHC/TC) interpuesta por Carlos Pacheco Ortiz, quien alegaba violación de su derecho al debido proceso y a la libertad individual, solicitando se deje sin efecto la resolución que lo declaró ser connotar y se interrumpió el plazo de prescripción, lo que no ha podido ser acreditado.



del proceso y, en tal sentido, inconstitucional su aplicación.

De otro lado, el Tribunal señaló que para determinar la razonabilidad del plazo del proceso, debe tenerse en cuenta criterios como: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la actuación de los órganos judiciales (los cuales originalmente estuvieron determinados a la evaluación de la razonabilidad del plazo de la detención).

Por consiguiente, la Resolución que declaró ser connotar y suspendió el plazo de prescripción, no vulnera ninguno de los derechos invocados puesto que es la propia actividad del interesado (como consecuencia de su retención a presentarse ante el órgano jurisdiccional competente) la que ha dilata la duración del proceso penal llevado en su contra.

Al respecto, el TC señala que el artículo 1° de la Ley N° 26641 dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos connotados. Respecto a la suspensión de los plazos de prescripción, en aplicación de la referida Ley, el Colegiado precisó que en caso de mantener vigente la acción penal al infinito, resultaría vulneratorio del derecho al plazo razonable

Precisan que la libertad de tránsito es un derecho individual y un elemento conforme de la libertad personal

El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de hábeas corpus contenida en el Expediente N° 04136-2011-PHC/TC, interpuesta por Aníbal Cárdenas Díaz contra la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Lima, alegando la vulneración a su derecho a la libertad de tránsito.

Cárdenas Díaz manifestó que fue intervenido por un efectivo policial que le impuso en forma arbitraria e ilegal, una papeleta y la retención de su licencia de conducir, en razón a que al efectuarse la prueba de campo de aire expirado arrojó como resultado 0.86 g/l (por encima del límite legal

permitido), medición que no se ajusta a la realidad conforme al certificado del dosaje etílico conforme.



El Colegiado recordó que el artículo 9° del Código Procesal Constitucional señala que en los procesos

constitucionales no existe etapa probatoria; motivo por el cual aprecia que la presente demanda puede ser dilucidada en un proceso que cuente con esta etapa, puesto que el Tribunal Constitucional no es competente para pronunciarse sobre la validez de la prueba de campo de aire expirado realizada al recurrente que motivó la imposición de la papeleta de infracción y la retención de la licencia de conducir, por lo que la demanda fue desestimada.

Asimismo, el TC precisó que el artículo 2° de la Constitución Política del Perú regula el derecho fundamental a la libertad de tránsito. Esta facultad supone la posibilidad de desplazarse autodeterminadamente en función de las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como a la de ingresar o salir de él, cuando así lo desee. Se trata de un imprescindible derecho individual y de un elemento conforme de la libertad individual.

Jurisprudencia constitucional

Si bien es posible el control constitucional de los actos del Ministerio Público no se puede cuestionar el criterio del fiscal en materias que son de su exclusiva competencia

El Tribunal Constitucional señaló que de conformidad con el artículo 159° de la Constitución el Ministerio Público le corresponde promover de oficio o de parte, la acción judicial y si bien es posible el control constitucional de los actos del Ministerio Público, no se puede cuestionar el criterio del Fiscal en materias que son de su exclusiva competencia.

Así lo precisó en la sentencia emitida en el Expediente N° 03182-2011-PATC, interpuesta por Florencio Gabino Ninauvincha, contra el Fiscal de la Primera Fiscalía Superior Penal Liquidadora de Arequipa y que el Tribunal declaró improcedente respecto a la valoración de las pruebas e infundada respecto de la alegada falta de congruencia de la Disposición N° 19-2009-MP-IFSP, porque no le ha acreditado la vulneración de los derechos del debido proceso y de defensa.



Con respecto a la alegada falta de congruencia en la disposición precitada y la disposición de archivo, así como de los fundamentos de la denuncia presentada por el recurrente, el Colegiado consideró que la demanda debe ser desestimada en base a las siguientes

consideraciones: De la lectura de la Disposición de Adecuación y Archivo N° 766-2008 de la Disposición N° 19-2009-MP-IFSP, (cuestionada) se aprecia que ambas resoluciones tratan sobre los mismos hechos que fueron materia de denuncia por parte del demandante.

En relación a que se habría desestimado la denuncia sobre una persona diferente a la denunciada, se aprecia, en la Disposición de Adecuación y Archivo N° 766-2008 que el recurrente denuncia a la persona de Oscar Hilares Maker y otros, y si bien en algunos considerandos de la Disposición N° 19-2009-MP-IFSP, se consigna el nombre de Oscar Linarez Maker, en otros considerandos de la mencionada disposición se consigna el nombre de Oscar Hilares Maker; es decir, este Colegiado advierte la existencia de un error material susceptible de ser corregido de oficio o de parte.

Contra los decretos y autos que dicte el TC solo procede el recurso de reposición sin perjuicio de recurrir a los tribunales u organismos internacionales



igual suerte corrió un anterior recurso de reposición planteado por la misma recurrente, tras considerar que lo que en realidad pretendía, era el reexamen de fondo de la resolución emitida de conformidad con lo dispuesto por el CPC y la jurisprudencia del Tribunal.

A través del nuevo recurso de reposición, Jiménez Caballero solicitó se deje sin efecto la resolución anterior por no estar de acuerdo con ella, toda vez que considera -una vez más-, que en el proceso seguido en contra de Alejandro Pérez Moreno y otros, sobre nulidad de acto jurídico, la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordena que se incorpore a los demás demandados, que participaron en el acto de compraventa del inmueble cuya nulidad solicita, vulnera sus derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la defensa y a la propiedad.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que como quiera que el presente pedido ya fue resuelto en anterior oportunidad, el Tribunal Constitucional reborda la petición de reposición con absoluto respeto a los deberes de legalidad, lealtad y cooperación con la justicia constitucional evitando interponer recursos inofensivos que obstaculizan el servicio de justicia de este Tribunal frente a causas que merecen un pronunciamiento urgente por el tipo de procesos que son materia de impugnación constitucional; caso contrario, se dispondrá la aplicación de las sanciones económicas que correspondan.

frente a estos, los demandantes entienden que sus renuncias a la sociedad no surten efecto y se desisten de ellas; sin embargo, y sin previo aviso, la empresa les denegó la posibilidad de cancelar sus renuncias a sus acciones.

Asimismo, alegan que de modo unilateral y abusivo se les excluyó de la sociedad y de su calidad de conductores; es decir, de sus trabajos, sin orden judicial ni mandato de autoridad competente, por lo que optaron por interponer el presente proceso de amparo.

De otro lado, el TC recuerda que el actor es el principal gestor de su derecho, por lo que es pertinente exigirle la diligencia necesaria a fin de acreditar que el acto jurídico cuestionado es arbitrario y que lesiona algunos de sus derechos fundamentales. Para ello, debe enfatizarse que todo jurisdicte tiene que probar mínimamente los hechos que alega, no siendo suficiente su simple afirmación.

El amparo contra resoluciones judiciales requiere constatación de un agravio manifiesto

El amparo contra resoluciones judiciales requiere como presupuestos procesales indispensables, la constatación de un *agravio manifiesto* que comprometa seriamente el contenido protegido de algún derecho de naturaleza constitucional. Sin estos requisitos básicos, la demanda resultará improcedente. Así lo reafirmó el Tribunal Constitucional al declarar improcedente la demanda contenida en el Expediente N° 04026-2011-AA/TC, interpuesta por Marco Antonio Cervera Chacra, contra la resolución de la Dirección Ejecutiva y Social Permanente de la Corte Suprema de la República.

El Tribunal señaló que en reiteradas oportunidades ha manifestado que el proceso de amparo en general y el amparo contra resoluciones judiciales en particular, no pueden constituirse en mecanismos de articulación procesal de las partes, las que por este medio pretenden extender el debate de las cuestiones procesales ocurridas en un proceso anterior, sea de la naturaleza que fuere. Sin embargo, hay jurisdicteables que insisten en esta pretensión.

En tal virtud, a juicio del Tribunal Constitucional, la presente demanda debe desestimarse, pues visa amparo a partes ajenas a la tutela de derechos fundamentales, como lo es la evaluación de los supuestos de hecho que justifican el que una resolución judicial sea casada o no por parte de la máxima instancia judicial, lo que constituye lo que evidentemente no procede a menos que pueda constatare una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada.



Revocan resoluciones de 1ª y 2ª instancia por haberse producido un indebido rechazo liminar

El Tribunal Constitucional revocó las resoluciones expedidas por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como la resolución de primera instancia y reformuladas, ordenó reanudar los actuados al Sexto Juzgado Constitucional de Lima a fin de que admita la demanda de amparo y la tramite con arreglo a Ley. Así lo dispuso en la resolución recaída en el Expediente N° 00854-2011-PATC, por considerar que en el presente caso se ha producido un indebido rechazo liminar, lo que conllevó al quebrantamiento de forma en la tramitación del proceso.

En el presente caso, el demandante Carlos Enrique Zarza Campos solicita se declare la nulidad e inaplicabilidad de la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) mediante la cual se le impone la sanción de destitución en su calidad de Juez Titular del Octavo Juzgado Penal de La Libertad, así como también las resoluciones que declaran infundados sus recursos de reconsideración y pedido de prescripción y en consecuencia, se ordene a la demandada su inmediata reincorporación.

El Tribunal estima que si bien el artículo 5.2° del Código Procesal Constitucional habilita a los jueces para -en el legítimo e independiente ejercicio de la función jurisdiccional- desestimar liminarmente una demanda, sin embargo no se tuvo en cuenta que lo que aquí se cuestiona guarda directa relación no sólo con la protección de los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, sino el control constitucional de las resoluciones del CNM en materia de destitución de jueces, que conforme a la doctrina jurisprudencial de este Tribunal, no sólo puede, sino que merece ser objeto de tutela a través de los procesos constitucionales como el presente amparo.

En ese sentido, el TC considera pertinente recordar que el rechazo liminar únicamente será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre la improcedencia de la demanda, lo que no ocurre en el presente caso.

Así lo reafirmó en la Resolución del Expediente N° 02040-2011-PATC, interpuesta por Céleste América Jiménez Caballero, declarando improcedente el recurso de reposición, señalando que

El amparo no es la vía para dilucidar desavenencias de orden societario señal el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional señaló que tratándose de la impugnación de un acuerdo societario, el proceso de amparo no es la vía, puesto que existen normas específicas que prevén la forma en que puede ser cuestionado, existiendo para ello vías igualmente satisfactorias para resolver la desavenencia. Así lo precisó al declarar improcedente la demanda contenida en el Expediente N° 03451-2011-PATC, interpuesta por Gil Avila Márquez y otros, contra el gerente de una empresa de transportes, aduciendo la violación de su derecho al trabajo.

Los demandantes refieren que ellos son fundadores de la empresa desde su creación, teniendo la posesión de parcelas ubicados en el área territorial de la Municipalidad de Los Olivos, donde venían trabajando con sus unidades móviles y que en el año 2008 renunciaron a sus acciones a condición de continuar trabajando en los paraderos que poseían.

Manifiestan que la empresa aceptó sus renuncias, pero les indicaron que no era posible que sigan trabajando en los aludidos paraderos;



Centro de Estudios Constitucionales

Actividades Académicas



Ucayali

En coordinación con la Corte Superior de Justicia de Ucayali, el CEC realizó el taller descentralizado el 24 y 25 de noviembre con el objetivo de capacitar a jueces, fiscales y profesionales del derecho de esta región. El primer taller se denominó "Amparo contra resoluciones judiciales". El viernes 25 participó la doctora Cirila Huanchauri Paucaur quien realizó el taller "Amparo en materia previsional". Ambas presentaciones tuvieron como escenario el salón Ucayali del Ucayali River Hotel.

Sullana

El Centro Cultural de Sullana fue escenario de la conferencia magistral que dio el director general del CEC, doctor Gerardo Eto Cruz sobre el tema "Amparo contra resoluciones judiciales" que es el título de su libro auspiciado por la Municipalidad Provincial de Sullana. Al término del acto el magistrado entregó a los presidentes de las cortes de Sullana y Piura, a los decanos de los colegios de abogados de Piura y Sullana y al coordinador general de la junta de fiscales de Sullana, el Disco Multimedia Interactivo referido a la sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Apurímac

El 18 y 25 de noviembre, el CEC se trasladó a la ciudad de Abancay para desarrollar dos talleres descentralizados en coordinación con la Corte Superior de Justicia de Apurímac. El primer evento académico que se inició el viernes 18 estuvo a cargo del doctor Berly López Flores, quien desarrolló el taller "Amparo contra resoluciones judiciales". El segundo taller que se realizó el viernes 25 de noviembre lo desarrolló la doctora Marlene Leonor Rodríguez Sifuentes, quien expuso sobre "Amparo en materia previsional". Participaron jueces, fiscales, profesionales del derecho y estudiantes de derecho.

Huaura

"Amparo contra resoluciones judiciales" es el nombre del taller descentralizado que realizó el CEC el 9 de noviembre en el marco de sus actividades académicas. El doctor José Miguel Rojas Bernal, asesor jurisdiccional del TC fue el encargado de desarrollar la ponencia en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Huaura. El taller estuvo dirigido a los magistrados de la Corte Superior así como de juzgados, Ministerio Público, Colegio de Abogados, abogados en general y estudiantes de derecho.

Curso de especialización

Con la conferencia inaugural a cargo del vicepresidente del TC, doctor Ernesto Álvarez Miranda, sobre "El Proyecto económico de la Constitución de 1993", se inició el 04 de noviembre el Curso de Especialización "Régimen Económico y Constitución", organizado por el CEC y la Universidad de San Martín de Porres. Está dirigido a los profesionales del derecho y docentes universitarios, cuyo objetivo es el afianzamiento del conocimiento de los conceptos y principios generales que fundamentan el actual régimen económico recogido por la Constitución Política del Perú.

Presentan Revista Peruana de Derecho Constitucional con el tema "Control Constitucional y Arbitraje"

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Álvarez Miranda presentó la edición especial de la "Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 4; Nueva Época", el mismo que ha logrado reunir a destacados juristas para abordar el tema "Control Constitucional y Arbitraje". Asistieron a la ceremonia el magistrado del TC Oscar Uribe Hani, ex magistrados del TC, juristas y profesionales del derecho.

El doctor Álvarez Miranda explicó que en este número de la revista sobre el proceso constitucional y arbitraje, más que hablar y comentar sobre el precedente que hoy en día debe constituir la piedra angular de la relación entre Constitución y arbitraje, es en realidad el testimonio de la lucha dura en la que el comentario y el debate punto por punto de aquellos en que ha enfrentado al Tribunal Constitucional con los árbitros y con los abogados dedicados tanto al proceso civil como al arbitraje.

Álvarez Miranda calificó la Revista Peruana de Derecho Constitucional como un testimonio del derecho que busca contribuir con la comunidad jurídica del país, no sólo en forma jurisdiccional con sus sentencias, sino a través de un medio de expresión netamente académico.



A su turno, el doctor Mario Castillo Freyre, sostuvo que la sentencia es una contribución valiosa de lo que es el arbitraje en el Perú. Agregó que este precedente del TC convalida a todos los árbitros a ser cuidadosos con el respeto a los derechos constitucionales.

El ex defensor del Pueblo, doctor Jorge Santiváñez de Noriega tuvo palabras de elogio para la revista que según dijo es significativo que esta edición especial haya coincidido con la Resolución del TC N° 142-2011-PA/TC en el que establece un precedente de observancia obligatoria para que no se presenten más demandas de amparo contra los laudos arbitrales. Aprovechó para destacar a todos los árbitros que han intervenido en la elaboración del texto.

La ceremonia de presentación se realizó en el salón de conferencias del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ubicado en la Av. Camino Real N° 1071, San Isidro. Se hicieron presentes los ex magistrados del TC Della Reverenda Marsano y José García Marcella, así como los juristas Felipe Osterling, Juan Luis Avelandá, Mario Paseo, Raúl Ferrero, Samuel Abad, Anibal Quiroga, entre otros.

Para esta ocasión participaron con sus artículos en la Revista Peruana de Derecho Constitucional destacados juristas como Alfredo Bullard, Mario Castillo Freyre, Rita Sabroso Mitayá, César Guzmán Barrón Sobrevilla, Rigoberto Zúñiga Maruri, Juan Luis Avelandá Valdez, Raffo Velásquez Meléndez, Sergio Tamar Sánchez, Gabriela Novoa Muñoz, Diana Mariscal Hermida, Lidia Moreno Blesa, Cristina Fernández del Llano, entre otros.



TC presentó ante la Corte Superior de Justicia de Lima la sistematización de su jurisprudencia que recopila las 700 mejores sentencias

La sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que recopila las cerca de 700 mejores sentencias que emitió el máximo órgano de justicia constitucional desde que entró en funcionamiento en el país, fue presentada en una breve ceremonia a los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El acto contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctor Héctor Lama More, vocales superiores, jueces y personal de la entidad judicial.

El director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del Tribunal Constitucional, doctor Eto Cruz explicó que se trata de un Disco Multimedia Interactivo que ha sido elaborado por el CEC con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el

marco del proyecto "Apoyo en la ejecución del Plan Estratégico del Tribunal Constitucional del Perú 2009-2012".

Dijo que el CD recopila las cerca de 700 mejores sentencias que emitió el TC las cuales han sido clasificadas de acuerdo a las demandas que han resuelto. Por ejemplo, encontrarán sentencias de jurisprudencia, procesos de inconstitucionalidad, procesos de amparo, de habeas corpus entre otros.

La Sistematización de la Jurisprudencia del TC está dirigida a toda la ciudadanía pero en particular a los jueces, fiscales, profesionales del derecho y estudiantes.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Héctor Lama agradeció la visita del doctor Eto y dijo que sin duda será una herramienta que gran ayuda para los vocales y jueces del Poder Judicial.



Informativo Mensual

DIRECTOR GENERAL

Carlos Mesia
Presidente del Tribunal Constitucional

EDITOR:

Gregorio Mattos
REDACCIÓN:
Carlos Rojas y Mariela Franco

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N.º 2009-05639

Colaborador: Giancarlo Cressi
Diagramación: Christian Guerra
Año 3 N° 32, noviembre 2011 - Tiraje: 10,000 ejemplares

Programa Tus Derechos

Se debe reglamentar la Ley General de la Persona con Discapacidad para hacer efectivo el artículo que ordena emplear a personas con discapacidad

Es necesario que se reglamente la Ley General de Personas con Discapacidad para que se cumpla lo establecido en el artículo 33° que las instituciones públicas deben emplear del total del personal, el 3% de personas con discapacidad señaló el congresista Michael Urtecho, durante su participación en el programa "Tus Derechos" del Tribunal Constitucional.

El parlamentario, quien es secretario de la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad del Congreso de la República, explicó que pese a la vigencia de la norma, lamentablemente, no se tomó en cuenta el tema presupuestal, pues existe una ley de austeridad que no permite contratar a personas con discapacidad.

Agregó que desde el Congreso ha impulsado hasta finales del gobierno anterior la reglamentación del artículo 33° de la Ley General de la Persona con Discapacidad, tema que ya fue consensado con los diferentes sectores del Estado y que lo único que faltaría es que el actual gobierno pueda retomar el tema y poder reglamentarlo.

Al tocar el tema de los censos nacionales, el congresista afirmó que lo que se hizo en los censos anteriores a nivel nacional lamentablemente fue sólo considerar dos preguntas: ¿tiene usted en el hogar a una persona con discapacidad? Si o no y ¿de qué tipo? Preguntas que no dicen nada. Ahora si se podrá hacer un censo que



será un punto de partida para saber qué es lo que falta hacer pues en estos registros de cuántas personas con discapacidad haya; y mientras no exista esa información difícilmente todas las políticas de Estado que incluyen el tema de discapacidad van a ser dispersos, aleatorios sin ningún plan único y sólido.

"Antes era Michael Urtecho el único parlamentario con discapacidad que estaba impulsando estos temas, ahora somos cinco parlamentarios con discapacidad y es saludable porque cada quien desde su propio partido apoyará al sector con discapacidad", precisó el legislador.

ENTREVISTADOS

Demetrio Tópaz Yupanqui, profesor y difusor del idioma quechua
Los quechuas pensaron por muchos años que el idioma quechua nació en el Cuzco, pero las investigaciones lingüísticas demuestran que el quechua es limeño. El idioma quechua nace en Caral casi cuatro mil años antes de Cristo y se extendió hasta en el Tarma, abarcando hacia el oriente hasta llegar a la selva y en aquella oportunidad los quechuas hablaban aimara y en Arequipa hablaban puquina, mientras que en Puno no se sabe qué idioma hablaban. Posteriormente, avanzó el habla del idioma quechua. (26/11/11)

Edgar Quispe Chamblí, lingüista aimara
En los últimos años se están dando las condiciones desde diferentes organismos para el desarrollo de la lengua aimara, así como para su preservación. Hoy en día las leyes permiten que la lengua aimara se desarrolle en large espacio de preservación y lo que corresponde a su nación es asumirla como su lengua materna e interactuar con otras culturas en el marco del enfoque de la interculturalidad. Con el tiempo la nación aimara ha sentido que su lengua se debilitaba e incluso corría el riesgo de producirse su extinción. (26/11/11)

Dr. Javier Adrián, asesor jurídico del TC
La solución del Tribunal Constitucional en el caso Majes Siglos II beneficia a las regiones Cusco y Arequipa, porque demuestra que pese a las discrepancias y a la confrontación que existe entre dos regiones, el Tribunal estableció una respuesta jurídica a este problema, que los beneficia. En este caso los ciudadanos del Cusco defienden su derecho al medio ambiente y al agua, mientras que los ciudadanos de Arequipa defienden su derecho al trabajo y al agua también. (19/11/11)

Dr. Giancarlo Crespo, asesor jurídico del TC
Irregularmente se ha entendido que el TC ha resuelto una demanda de amparo en el caso Majes Siglos II y no es así, pues lo que ha conocido el Tribunal es un proceso de amparo que se originó en el juzgado competente del Cusco y luego subió en segunda instancia a la Sala. El problema se origina como consecuencia de una decisión de la Sala de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco que en fase de ejecución desvirtuó los efectos de la sentencia de primera instancia. (19/11/11)

Wilfredo Guzmán Jara, presidente del CONADIS
Debe existir inversión pública y una política para que todos los colégen en el país incluyan niños con discapacidad en sus aulas, así como preparar a los maestros, utilizar materiales didácticos, haciendo accesible la escuela. El niño va sintiendo que una persona que es diferente es parte también de su entorno y no lo va a discriminar, no lo va a excluir, pero si continuamos con esa actitud de no tener a todos nuestros niños a la par con los demás entonces se construye en la mente de los seres humanos una actitud discriminatoria. (12/11/11)

Dra. Maribeth Rondón, siquieta de la U. Peruana Cayetano Heredia
Las sentencias del TC son importantes porque señalan la obligación que tiene el Estado de mejorar la situación de los servicios de salud mental y de incorporar la salud mental en la atención primaria, es decir que los médicos generales sean capaces de reconocer e iniciar el tratamiento. La salud mental siempre ha sido la céntrica de la salud, aunque en los últimos años desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) hubo grandes esfuerzos por cambiar esta situación. (05/11/11)

Oráculo jurídico



1. Diferenciación y discriminación son dos categorías jurídico constitucionales distintas?

En principio, debe precisarse que la **diferenciación** está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, estaremos frente a una **discriminación** y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable. (STC 00048-2004-Pi/TC, fundamento 62).

2. ¿Qué se entiende por dimensión formal del derecho a la igualdad?

Esta dimensión impone una exigencia al legislador para que no realice diferencias injustificadas, pero, también, a los demás órganos del Estado para que no apliquen la ley de forma desigual a supuestos semejantes. (STC 00048-2004-Pi/TC, fundamento 10).

3. ¿Qué se entiende por dimensión material del derecho a la igualdad?

Se sostiene, que a parte de la obligación de abstención por parte del Estado de realizar actos discriminatorios, existe una obligación positiva para equiparar situaciones desiguales. (STC 00048-2004-Pi/TC, fundamento 11).

4. ¿Cuándo estamos frente a una discriminación?

Cuando la desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional estaremos frente a una discriminación y por tanto frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable. (STC 00048-2004-Pi/TC, fundamento 62).

5. ¿El Estado puede promover un trato diferenciado?

El Estado en algunas oportunidades promueve el trato diferenciado de un determinado grupo social, otorgándole ventajas, incentivos o, en general, tratamientos más favorables. Esto es lo que en doctrina constitucional se conoce como "discriminación positiva o acción positiva -affirmative action-". La finalidad de esta acción afirmativa no es otra que compensar jurídicamente a grupos marginados económica, social o culturalmente; persigue, pues, que dichos grupos puedan superar la inferioridad real en la que se encuentran con acciones concretas del Estado. (STC 00048-2004-Pi/TC, fundamento 63).

6. ¿Qué supone el derecho a la igualdad ante la ley?

El derecho a la igualdad ante la ley supone que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma. (STC 00048-2004-Pi/TC, fundamento 60).

7. ¿Qué implica el derecho a la igualdad en la ley?

El derecho a la igualdad en la ley implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. (STC 00048-2004-Pi/TC, fundamento 60).

8. ¿En qué consiste la igualdad como derecho?

La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2° de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: «... toda persona tiene derecho (...) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole». Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. (STC 00048-2004-Pi/TC, fundamento 59).

9. La igualdad es un derecho o un principio?

La igualdad consagrada constitucionalmente (artículo 2°, inciso 2) denota la doble condición de principio y derecho. (STC 00606-2004-Pi/TC, fundamento 9).

TUS DERECHOS
SABADOS

11:00 am

TV Perú





Durante el mes de noviembre el TC realizó en Lima audiencias públicas de Pleno y Salas dejando al voto 443 procesos

Durante el mes de noviembre el Tribunal Constitucional realizó seis audiencias públicas de Pleno y Salas, en su local de Lima, dejando al voto un total de 443 causas entre procesos de amparo, cumplimiento, habeas corpus y habeas data.

El Pleno del TC presidido por el magistrado Carlos Mesa e integrado por los magistrados Ernesto Álvarez (vicepresidente), Juan Vergara, Ricardo Beaumont, Fernando Calle, Gerardo Eto y Oscar Urvielva, celebró dos audiencias públicas los días 09 y 30 de noviembre dejando al voto 69 procesos de garantías.

Mientras que la Primera Sala presidida por el magistrado Ernesto Álvarez e integrada por los magistrados Ricardo Beaumont y Fernando Calle, realizó dos audiencias públicas

dejando al voto 186 procesos de garantías. Estos actos procesales se realizaron los días 07 y 21 de noviembre.

Finalmente, la Segunda Sala presidida por el magistrado Gerardo Eto e integrada por los magistrados Juan Vergara y Oscar Urvielva realizó dos audiencias públicas los días 10 y 28 de noviembre dejando al voto 188 procesos de garantías. Estos actos procesales se realizaron en la Sala de audiencias del TC, ubicada en Jr. Ancash N° 390, Lima.

Durante las audiencias los abogados de las partes hicieron uso de la palabra, así como también los propios justiciables que lo solicitaron, con la finalidad de ilustrar a los magistrados para mejor resolver.

Entre las instituciones y entidades públicas demandadas figuran ministerios, Oficinas de Normalización Previsional, Poder Judicial, municipalidades provinciales y distritales.

Periodistas de diversos medios de comunicación fueron capacitados en taller "funciones, procesos y jurisprudencia del TC"

Con una importante concurrencia de periodistas de diversos medios de comunicación, el Tribunal Constitucional realizó el viernes 4 de noviembre, el taller de inducción denominado "Funciones, Procesos y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional", dirigido a los hombres de prensa, con la finalidad de dar a conocer el trabajo que realiza este importante órgano de justicia constitucional.

El evento se inició con las palabras de bienvenida a cargo del presidente del TC, magistrado Carlos Mesa, quien señaló que el objetivo del taller es que los periodistas conozcan los procesos que llegan al TC, así como entender las sentencias que se emiten.

Seguidamente, se desarrollaron tres bloques de conferencias a cargo de asesores jurídacionales de este Alto Tribunal. El primer

bloque llamado "Rol del Tribunal Constitucional", a cargo del doctor Javier Adrián Corpana, quien explicó sobre las funciones y atribuciones del TC.

Luego se realizó el segundo bloque denominado "Proceso de Amparo y Habeas Corpus", a cargo del doctor Camilo Suárez López de Castilla quien expuso sobre la naturaleza de estos procesos constitucionales y en qué circunstancias los resuelve el Tribunal Constitucional.

Finalmente, el tercer bloque denominado "El Proceso de Inconstitucionalidad" fue impartido por el doctor Edgar Carpio Marcos quien dio a conocer la importancia, los alcances y el impacto



de los procesos de inconstitucionalidad en el ámbito jurídico y político nacional.

Las palabras de clausura del taller estuvieron a cargo del doctor Horst Schönhuber, representante de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, auspiciador del evento, quien resaltó la importancia de realizar eventos dirigidos a periodistas para poder explicar con mayor profundidad la labor que desempeñan las instituciones del Estado.

TC contará con nuevo y moderno local institucional tras partida presupuestal aprobada en el Congreso para la compra de terreno

El Tribunal Constitucional contará en el futuro con un nuevo y moderno local institucional, luego que el Pleno del Congreso de la República aprueba la partida presupuestal correspondiente para la compra de un terreno de aproximadamente 10 mil metros cuadrados en Lima.

El presidente del TC, Carlos Mesa, agradeció el respaldo de la representación parlamentaria que con sus votos, hacen que se inicie una etapa de modernización del Tribunal Constitucional



en defensa de los derechos fundamentales de la persona.

Agregó que actualmente el órgano de justicia constitucional ocupa como local la antigua

Casa de Pilatos, ubicada en el Jirón Ancash N° 390 en el Cercado de Lima. Explicó que se trata de una casa que se construyó en 1590, medio siglo después de la fundación de Lima.

Mesa señaló que si todo marcha como se ha planificado, en los meses de julio del próximo año se debe haber comprado el terreno y seguidamente se iniciará el proceso de concurso público internacional, probablemente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a fin de hacer el diseño de la moderna edificación.

ACTIVIDADES



El proyecto de presupuesto del Tribunal Constitucional para el año 2012 ascendente a 26,390,003 nuevos soles fue sustentado por el titular del TC Carlos Mesa ante el Pleno del Congreso de la República. Explicó que dicha cifra se distribuye de manera porcentual por actividades. En el rubro Justicia 76%, Gestión administrativa 16% y Asistencia y Previsión Social 8 %. Agregó que el rubro presupuesto representa el 1% de todo el presupuesto de las entidades del sector justicia.



Una importante reunión de trabajo sostuvo el presidente del TC, Carlos Mesa, el ministro de Justicia, Francisco Figuerías y el primer de la Corte Suprema de Justicia de Panguyo, Oscar Bague, con el objetivo de evaluar el funcionamiento del Código Procesal Constitucional y la posibilidad de implementarlo en Panguyo. Participaron los magistrados Ernesto Álvarez y Gerardo Eto, el constitucionalista Domingo García Belandier, Joel Melgar, asesor de la Corte Suprema de Panguyo, entre otros.



El Tribunal Constitucional recibió el certificado de licencia de uso de la Marca País Perú por parte de José Tagle, coordinador de Gestión de Marca de la Dirección de Promoción de Imagen País de ProPéru. Al acto asistieron el presidente del TC, Carlos Mesa y el magistrado Oscar Urvielva. La Marca País Perú tiene el objetivo de promover la imagen positiva del país a nivel nacional e internacional, principalmente en los ámbitos de turismo, comercio exterior e inversiones.



La sentencia del TC sobre laudo arbitral ha puesto nuevamente en el foro jurídico la discusión sobre la intervención del órgano de justicia constitucional en el control del arbitraje, señaló el doctor Oscar Urvielva Hani durante su participación en el conversatorio "El Control Constitucional del Arbitraje. ¿Limitación o Promoción de la facultad de derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)? También participaron el jurista Jorge Santistevan de Noriega y la profesora de UPC Elvira Martínez Cocco.